

Luis Gómez Calcaño

## ¿Nuevos actores políticos?

# Más allá del antipartidismo

### CRISIS DE LEGITIMIDAD Y BÚSQUEDA DE ACCIONES

El grave deterioro de la legitimidad de los actores centrales del sistema político venezolano es un hecho que ya no necesita ser demostrado; numerosas encuestas y la observación de los sucesos políticos recientes ratifican el mismo resultado, que afecta sobre todo a los partidos políticos y a las instituciones relacionadas con ellos, como el poder legislativo. Las Fuerzas Armadas y sobre todo la Iglesia parecen ser menos afectadas por este rechazo, pero también han perdido parte de su "credibilidad". A partir de febrero de 1992, se ha producido una aceleración del proceso de descomposición del vínculo entre los aparatos partidistas y la población. El surgimiento de un cierto apoyo al liderazgo carismático del comandante Chávez, la popularidad de las posiciones antipartidistas del ex Presidente Caldera, el rechazo popular a los congresantes y a su reforma constitucional, la continuidad de los escándalos de corrupción y droga, y el aislamiento político del Presidente confirman esta crisis. Por otra parte, surgen o se reactivan organizaciones o grupos de opinión alrededor de exigencias como la de convocar una asamblea constituyente o de exigir la renuncia del Jefe de Estado.

La cuestión de la decadencia del actual sistema político, pero sobre todo la de cuáles serían las formas más adecuadas de sustituirlo o reformarlo están a la orden del día. Esta situación lleva a plantearse una pregunta central: ¿Pueden los partidos políticos actuales seguir siendo el eje de la vida institucional? Y si no son ellos ¿cuáles son los actores llamados a llenar el vacío que estos dejan?

Esta pregunta tiene diversas implicaciones. En primer lugar, los regímenes democráticos contemporáneos presuponen la existencia de los partidos políticos, por lo cual la pregunta misma sería absurda si se plantea en términos estrictamente institucionales y limitados a la esfera polí-

tica. No puede concebirse una democracia moderna sin partidos; por lo tanto no puede concebirse una desaparición de éstos sin ruptura de aquélla. El proceso «normal» de sustitución de élites supondría la formación de nuevos partidos que desplazarían electoralmente a los anteriores que han perdido vigencia. Esta opción es posible y debe ser explorada; de hecho, en los últimos años han surgido en Venezuela nuevos partidos que han logrado, en algunos niveles todavía muy modestos (local y regional), competir con y hasta desplazar a los predominantes.

Pero la pregunta contiene implícita una afirmación: el problema del sistema político venezolano no es simplemente de «contenido», esto es, de los actores específicos que ocupan los roles centrales, sino de «estructuras», es decir, del tipo de relación que se establece entre partidos, Estado y sociedad civil. Esta es una relación que parte del papel central del Estado en la vida social y del doble control de los partidos sobre el aparato estatal y sobre la sociedad civil. Si, como se ha visto, este tipo de relación ya no es aceptado por la sociedad civil, no bastaría la sustitución de unos actores por otros en el interior del sistema: sería necesario redefinirlo para dotarlo de una nueva legitimidad, pero sobre todo para que cambie el sentido de su acción.

### PARTIDOS, GRUPOS DE INTERES Y OTROS ACTORES NO PARTIDISTAS

Pero esta discusión no parte de cero, puesto que los partidos en realidad nunca son los únicos actores de un sistema político. Ellos deben interactuar con grupos de presión y de interés, algunos más institucionalizados que otros. Todo régimen democrático debe plantearse la pregunta acerca de la relación entre estos dos tipos de actores: ¿Son los partidos los únicos mediadores y agregadores legítimos de intereses, o se admite un rol explícito en el sistema político a los gru-

pos de interés y organizaciones civiles? Si se acepta ese rol, ¿cuáles son los límites respectivos entre los campos de acción de uno u otro tipo de organización?

Esta cuestión ha sido estudiada en los últimos años bajo el enfoque del «neocorporativismo». El mismo supone que los grupos de interés actúan, a veces ejerciendo presión, otras en concertación con el Estado y los partidos, tratando de negociar acuerdos que tomen en cuenta adecuadamente los intereses de cada uno de los participantes. Los partidos que ejercen el gobierno intentan, por su parte, que el costo de los acuerdos no recaiga exclusiva o predominantemente sobre el Estado, lo cual erosionaría su capacidad de acción y su legitimidad. Este mecanismo de concertación institucionalizada ha sido una respuesta de las élites políticas a la difuminación creciente de las fronteras entre lo político y lo «social», o entre el sistema político y la sociedad civil. La concertación permite identificar y procesar las demandas e intereses de una parte de los actores de la sociedad civil (generalmente las instituciones representativas de los patronos y de los trabajadores) en forma paralela o, más precisamente, complementaria a los mecanismos institucionales formales de representación y decisión, previendo sin embargo momentos y procedimientos de contacto entre ambos procesos (consultas formales, interpelaciones parlamentarias, comisiones mixtas entre funcionarios y representantes de los actores afectados por las políticas sectoriales, etc.). Este proceso es legitimado y ratificado en última instancia por los organismos formales de poder (el Parlamento o más frecuentemente, el Ejecutivo). Pero si, como sucede en Venezuela, los actores que participan en el proceso van perdiendo su contenido real de representación, el mismo queda viciado, como lo han mostrado los sucesivos fracasos de las instancias de concertación diseñadas en la última década, como la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios, la Comisión Tripartita Gobierno-CTV-FEDECAMARAS y el «Pacto Social».

El esquema neocorporativista parte de suponer que estos grupos se limitan a sus fines particulares o, como máximo, a propugnar reformas parciales que, aun promoviendo sus objetivos, no pongan en cuestión las reglas de juego centrales del sistema. La cuestión se complica si entre esos actores hay algunos que no se limitan a dicha promoción de intereses particulares, sino que pretenden influir sobre las decisiones relativas a algún aspecto central del orden social y político. Más aún, nada garantiza que alguno de estos grupos «particularistas» no pueda con-

vertirse, en determinadas circunstancias, en grupo cuestionador o al menos promotor de reformas significativas. Ello implica que la frontera entre una acción puramente corporativa y particularista y una acción «política» (es decir, una que pretenda incidir sobre el modo de funcionamiento del sistema político, sus correlaciones de fuerzas o la definición misma de sus criterios de inclusión y exclusión) no es en absoluto rígida. En el funcionamiento cotidiano de los sistemas políticos es más frecuente la existencia de una amplia zona gris que se extiende desde los grupos de interés claramente institucionalizados y reconocidos, que pretenden operar en términos de una lógica estrictamente «económico-corporativa» hasta los actores políticamente orientados, ya sea a favor o en contra de los acuerdos centrales y valores-guía del sistema. En consecuencia, entre los actores periféricos o intersticiales al sistema político, aun si no muestran la estructura y fines de los partidos y grupos de interés, puede encontrarse núcleos generadores de actores, que podrán o no ser compatibles con las estructuras políticas predominantes.

Esta «zona gris» entre la sociedad civil y el sistema político contiene diversos grados y formas de organización e institucionalización y múltiples orientaciones valorativas; los criterios de inclusión-exclusión del sistema político y de los mecanismos de concertación no son únicamente, ni siquiera predominantemente, los de coincidencia o no coincidencia con los valores centrales del sistema. Una organización (o una corriente de opinión poco organizada) puede coincidir en sus valores básicos con los del sistema, y sin embargo permanecer excluida del mismo en la medida en que no logre «movilizar recursos» que le permitan presionar para hacerse reconocer e incluir. En Venezuela, este sería el caso de numerosas organizaciones de base local, sobre todo de los sectores populares, cuya actividad central es la demanda de acción estatal, principalmente en el área de los servicios públicos, tratando de articularse a los mecanismos clientelistas de los partidos. En este caso, aunque el grupo mismo acepta el marco general de orientaciones del sistema político, no es realmente considerado un «interlocutor válido» en la medida en que se le trata más bien como un objeto de dádivas que serán negociadas a cambio de votos. Adicionalmente, todo parece indicar que, desde principios de la década de los ochenta, la satisfacción mínima de las demandas globales de los sectores populares en términos de no perder lo adquirido en años anteriores en las áreas de infraestructura, vivienda, salud, empleo, transporte y educación

está más allá de la capacidad real de producción de *outputs* del sistema político y del Estado. Puede preverse, por el contrario, que continúe el deterioro que se ha venido observando en la última década. Esta situación contribuye a desarticular más aún el vínculo entre estas organizaciones de base y los partidos, ya que hasta el limitado rol de «cliente» pierde sustentación.

Algunos grupos y organizaciones (por ejemplo, la mayor parte de las organizaciones vecinales de clase media), comparten los valores y orientaciones más generales del orden socioeconómico vigente y del sistema político, pero critican los medios institucionales dirigidos a realizarlos. Otros exigen el reconocimiento y la inclusión de estratos, sectores o grupos sociales que consideran injustamente excluidos de la participación en las decisiones. Las organizaciones de mujeres, las indigenistas y una parte de las ecologistas serían ejemplos de este tipo de grupos en Venezuela. Otros actores, entre los que se encuentran comunidades cristianas de base y diversos grupos de reflexión, plantean la necesidad de transformaciones profundas de las relaciones socioeconómicas y políticas en el mediano plazo, sin que ello implique aislarse del sistema político predominante, sino más bien participar activamente en el mismo para presionar por reformas que abran gradualmente camino a las transformaciones deseadas. Finalmente, otros tratan de construir, en espacios limitados, ensayos de relaciones sociales «alternativas» que puedan servir como apoyo material e ideológico a los objetivos de cambio social general que propugnan.

Para este tipo de actores, que sólo ocasionalmente y en forma subordinada son reconocidos por los actuales mecanismos de concertación institucionalizada, el enfoque neocorporativo es menos relevante que el de la «democracia participativa». Ella se entendería como un régimen en el cual la representación política de base territorial es complementada por: a) mecanismos electorales como el referéndum, -en el cual los ciudadanos se expresan directa e individualmente sobre decisiones políticas precisas en lugar de delegarlas a los representantes; b) el reconocimiento del derecho de ciertas asociaciones —representativas de comunidades o sectores de actividad— a ser consultadas sobre decisiones que los afecten. Es claro que esta segunda dimensión corre el riesgo de no ser sino una variante del neocorporativismo, que comporta en principio los mismos problemas y limitaciones de aquél: el de los criterios de inclusión y exclusión de actores organizados, el de la representatividad real de los actores res-

pecto de sus «bases», y sobre todo, el de fijar los límites entre la participación y el poder de veto. En efecto, un grado demasiado alto de «participación» de grupos particulares en las decisiones de los gobiernos nacionales, regionales o locales) podría terminar por invalidar el mandato de los representantes electos a favor de grupos de presión auto-elegidos. Sin embargo, el enfoque de «democracia participativa» tiene a su favor el argumento según el cual ella no pretende más que extender a los sectores más débiles, que son la mayoría, el mismo derecho a ser tomado en cuenta que tienen los grupos de presión que expresan los intereses de minorías poderosas.

### ESCENARIOS POSIBLES DE EVOLUCION DEL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO

Ante la actual crisis de legitimidad de los partidos, que abarca también a las organizaciones sindicales y profesionales por ellos controladas, se ha venido generando la idea de que la organización partidista es en sí misma el mal, y que al desembarazarse de los actuales partidos la sociedad venezolana se enfrentaría a sus problemas fundamentales en una forma más eficiente y democrática. Sin embargo, este antipartidismo puede ser una peligrosa ilusión: en efecto, desplazar a los actuales e ineficientes mecanismos de representación supone tener una idea de cómo se les puede sustituir, a riesgo de caer en la confianza ciega en un líder o en una institución autoritaria, a quien se transfiera la responsabilidad de decidir.

Por eso es necesario plantearse diversos «escenarios» de recomposición de las relaciones entre actores, que tomen en cuenta el problema de la necesaria búsqueda de opciones concretas para enfrentar los problemas de la representación y de la relación entre actores sociopolíticos.

#### A. La actualización del sistema político

Este escenario supone que los principales actores (partidos y organizaciones corporativas) logran autotransformarse para responder a algunas de las críticas y demandas de reforma. Esta transformación sería tanto interna como externa, en lo interno supone una «democratización», una renovación de las estructuras que permitiera el ascenso de nuevas élites más «modernas» y abiertas a la sociedad civil, y otorgara algún grado de voz y control a las «bases». En lo externo supone una redefinición de las relaciones con

los otros actores y con el Estado mismo, que supere el modelo actual de «doble control». Denominamos a esta opción «actualización» porque supone una «puesta al día» de los partidos frente a una sociedad que ha avanzado, tanto en lo organizativo como en la concepción misma de lo que es democracia, mucho más allá de los partidos. Este es precisamente el proyecto que ha pretendido llevar a cabo la COPRE; una evaluación de sus resultados hasta el momento indica que dicho proyecto tiene el apoyo de algunos sectores internos de los partidos, porque sin él no habría podido ni siquiera plantearse; pero las resistencias al mismo han sido tales que han logrado diluir en gran parte el alcance de las reformas y el efecto religitimador que se esperaba de ellas. Ello ha llevado a ciertos analistas a comparar, por ejemplo, a AD con una «mafia»; es decir, a caracterizarla como una organización cuyo fin primordial es el enriquecimiento de sus miembros, y las funciones políticas que ejerce serían sólo un medio para aquel fin primordial.

Podría plantearse como hipótesis que, ante los nuevos y alarmantes signos de deterioro del sistema político, los sectores reformistas internos podrían pasar a la ofensiva y tratar de acelerar los cambios propuestos, como una estrategia racional para detener las tendencias negativas. Pero el reciente ejemplo de la discusión de la reforma constitucional no permite hacerse muchas ilusiones al respecto: la élite política prefirió reservarse el monopolio de la discusión de las reformas, en lugar de acceder a las proposiciones (aceptadas en un principio por los líderes más importantes del gobierno y la oposición) de convocar a una asamblea constituyente. El contenido mismo de la reforma evadió temas centrales como el de los mecanismos de revocatoria del mandato de los representantes elegidos, incluyendo al Presidente, y se sumergió en polémicas ajenas a los problemas esenciales de la representación política. El resultado fue una reforma que iba a ser seguramente rechazada por el electorado; finalmente, la oposición de los grupos económicos propietarios de los más importantes medios de comunicación frente a ciertas disposiciones sobre la libertad de expresión intimidó tanto a los partidos que prefirieron enterrar la reforma.

### B. La ruptura del régimen democrático

Las numerosas advertencias al respecto fueron confirmadas por el intento de golpe de febrero de 1992, y sobre todo por la reacción de apoyo popular que encontraron, al menos temporalmente, los gol-

pistas. Ello muestra que tal escenario es políticamente viable, en la medida en que existen actores ideológicamente afines a este tipo de proyecto en el seno de las Fuerzas Armadas y en la sociedad civil; sin embargo, su puesta en práctica enfrenta obstáculos institucionales internos y externos. En todo caso, es innegable que la «zona gris» se ha enriquecido con un nuevo actor, que traspasa la frontera civil-militar: el «golpismo» o mejor «los golpismos», ya que sin duda se divide internamente en diversas tendencias ideológicas y grupales. Un elemento común a todas estas tendencias es el antipartidismo, que permite echar sobre los hombros de los partidos toda la responsabilidad por la corrupción y la ineficiencia del Estado. Pero más allá de esta idea elemental, sólo se encuentra en el discurso de los golpistas fracasados del 4 de febrero y su entorno vagas fórmulas nacionalistas y referencias al «pueblo». Cuáles puedan ser las orientaciones proyectuales e ideológicas de los otros grupos internos de las Fuerzas Armadas que pudieran estar en condiciones y disposición de insurgir sólo podría ser materia de especulación. Pero no hay ninguna razón para suponer que todos ellos sean «progresistas», populistas o participativos. Sin embargo, puede preverse que la retórica participativa y favorable a la «sociedad civil» que se ha venido expandiendo en los últimos años debería ser tomada en cuenta por un régimen militar, aunque fuera sólo para legitimarse entre algunas capas sociales con fuerte influencia en la opinión pública. El recurso a instituciones de «participación» controlada desde el poder no sería en este caso descartable.

### C. El surgimiento de nuevos actores y nuevas relaciones de poder

Este escenario supondría que una combinación de fuerzas internas y externas, con predominio de estas últimas, logre por diversas vías una modificación importante de las características centrales del sistema. Sea por la vía electoral, en la cual nuevos partidos y organizaciones desplazarían a los actualmente predominantes: sea por la vía de exigir reformas y presionar desde la sociedad civil para su aprobación, o por alguna combinación de ambas, estos actores políticos emergentes harían algo más que «actualizar» el sistema político; se trataría de redefinirlo.

## IMPLANTACION DE NUEVOS PARTIDOS EN EL SISTEMA POLÍTICO

En los últimos años, los intentos de introducir nuevos partidos en el sistema político tuvieron resultados ambiguos. Una comparación entre las estrategias de implantación del MAS y La Causa R, los dos más significativos, puede ser útil.

El MAS contó en sus años iniciales, y hasta mediados de los ochenta, con el apoyo y participación de prestigiosos intelectuales, pero no logró enraizarse en los sectores populares ni obtener resultados electorales significativos. Después de unos primeros años de «irreverencia» y del uso de un lenguaje moderno y radical que lo hacían un representante de la «nueva izquierda» de los años setenta, el MAS optó por integrarse al sistema político, incorporándose al reparto pactado de cargos en el Congreso, en los sindicatos y otras instancias de poder. Aunque no ha participado con ministros en ningún gobierno, esta incorporación señalaba la voluntad de convertirse en «opción de poder» y romper con el pasado inquietante de sus principales líderes. Pero al parecer, el MAS escogió el peor momento para convertirse en partido «del sistema»; aquél en el que la pertenencia al sistema acarrea desprestigio y desconfianza. Por otra parte, el MAS perdió, al igual que la mayoría de los partidos socialistas del mundo, su especificidad en términos de proyecto e ideología. Al desechar la radicalidad, se hizo cada vez más difícil separar sus propuestas de las de la socialdemocracia. Si bien algunos dirigentes han intentado desarrollar la especificidad del partido concentrándose en los niveles local y regional, o tratando de articularse a la sociedad civil usando la idea-fuerza de «movimiento de movimientos», por otra parte se ha desarrollado un importante aparato de cuadros que controla el partido, diferenciándolo poco de los socios mayores del sistema. En la medida en que su proyecto se fue aproximando al de los partidos predominantes, y sus campañas se centraron más en la denuncia de la corrupción y otros hechos políticos inmediatos que en el «socialismo», aumentó su caudal electoral. Pero el mismo dependía en gran parte de líderes regionales, dotados de una base electoral propia, que comienzan a abandonar al partido a medida que sienten el creciente antipartidismo de las masas. Y la mayor parte de los intelectuales que lo apoyaban se reconvirtieron a la socialdemocracia o el neoliberalismo, siendo algunos de ellos los actuales ejecutores del programa de ajustes.

La Causa R fue inicialmente un «residuo» minúsculo de la división del Partido Comunista que dio origen al MAS. Sin

definirse inicialmente como partido ni darse estructuras formales, concentró sus fuerzas en el trabajo sindical en la industria básica de Guayana. El éxito de la Causa R consistió en tener una visión de largo plazo y compartir con los trabajadores la experiencia cotidiana de la gestión sindical. Los aparatos de AD y COPEI, que controlaban estrechamente los sindicatos de esas empresas, aparecían como invencibles. Después de varios años de lucha, en los cuales se usaron contra los sindicalistas de LCR todos los métodos de intimidación y chantaje que conocen quienes se han enfrentado a las maquinarias partidistas y sindicales, ese partido conserva la lealtad de la mayoría de los trabajadores de la zona, hasta el punto de haber llevado a su líder a la posición de gobernador del Estado Bolívar. La política intransigente de LCR en el sentido de no admitir ser identificada con los demás partidos, ni aceptar ningún tipo de alianzas (especialmente con la izquierda, por la que muestra un gran desprecio) le ha permitido ser el receptor de una buena parte del voto de protesta. El discurso de LCR también ha variado desde sus orígenes marxistas. El énfasis actual es contra la corrupción, contra las élites partidistas y por un democratismo de base, pero no se trata de un proyecto «anticapitalista», sino, a falta de un mejor nombre, «neopopulista»; la categoría «obrero» o «clase trabajadora» es demasiado estrecha para describir su referente social.

Uno de los problemas centrales de LCR es su ambigüedad; como otros «partidos anti-partido», enfrenta permanentemente el dilema entre institucionalizarse más en la medida en que crece, y correr el riesgo de parecerse más a los partidos que critica, o evadir esta institucionalización y perder su coherencia y efectividad. Del resultado de su gestión cotidiana puede depender mucho de su futuro. Paradójicamente, un éxito del gobernador y los alcaldes de ese partido reforzaría al sistema político, en la medida en que probaría la posibilidad de influir por medio del voto en la vida política regional y local, y de darse gobernantes más cercanos, menos controlados por la oligarquía partidista del centro. A pesar de su carácter minoritario y aún «excéntrico» en algunas de sus actuaciones, LCR ha logrado ser reconocido como un actor político digno de ser tomado en cuenta. Pero tanto si tiene éxito como si fracasa, LCR sólo podría ser uno de los componentes de un conjunto de actores que tendrían que unir sus fuerzas para producir transformaciones significativas en el sistema político.

Otros partidos surgidos en años recientes, con orientaciones ideológicas menos precisas, han logrado algunos éxi-

tos electorales puntuales, pero no han desarrollado ni un perfil de acción ni propuestas programáticas capaces de diferenciarlos de la corriente principal del sistema político, impulsada por el pragmatismo centrista de AD y COPEI.

En síntesis, la vía de una relegitimación del sistema político por la emergencia de nuevos partidos parece, hasta ahora, poco fecunda. La principal prueba de ello lo constituye el aumento constante de los índices de abstención electoral, que indican que el partido que más crece en Venezuela es el de los anti-partidistas.

## REFORMAS IMPULSADAS POR ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL

### Las organizaciones ciudadanas de base

Las nuevas formas de organización de los ciudadanos han venido surgiendo como producto de la necesidad de «sustituir» a un Estado-Partido incapaz de cumplir con sus funciones (como la gestión local), de la de «hacerlo retroceder» de áreas indebidamente ocupadas (como los sindicatos y gremios), o incluso de exigirle que cumpla sus deberes elementales como la defensa del derecho a la vida y la seguridad de las personas (como las organizaciones en defensa de los derechos humanos).

La experiencia de autoorganización y autonomía de estos actores (en contraste con la dependencia hacia los líderes y aparatos que caracteriza a las predominantes del sistema) les ha llevado a superar sus límites iniciales, centrados en la sociedad civil y la gestión local, para llevarlos a cuestionar la relación misma entre Estado, partidos y ciudadanos. En consecuencia, estos actores pasan a formar parte de la «zona gris» entre el sistema político estrictamente delimitado y la sociedad civil, en tanto ejercen presión sobre los gobernantes acerca de problemas y necesidades puntuales (actuando como grupo de presión); pero también en tanto proponen o apoyan reformas políticas locales, regionales y nacionales (y en este sentido ya corresponderían a lo que algunas corrientes teóricas denominan movimientos sociales). Finalmente, estos grupos podrían tener un importante papel en el proceso de renovación de las élites, en la medida en que algunos de sus líderes u organizaciones efectúen la transición desde el nivel estrictamente social o corporativo hasta el propiamente político. La transformación de «movimientos sociales», o, más precisamente, de algunas organizaciones de movimientos sociales en partidos políticos ha sido estu-

diada ya en Europa, especialmente en el caso de los movimientos ecologistas (que por lo demás han sido los únicos MS que han dado este paso). Nadie duda hoy en día del impacto político que tienen hoy esos partidos surgidos de movimientos en países como Alemania y Francia. Es cierto que en esta transformación dichos partidos han sufrido en parte la erosión y la pérdida de credibilidad que afecta a los demás actores establecidos, así como otros fenómenos como la burocratización y el fraccionamiento interno. Pero al introducir nuevas opciones en el sistema político, contribuyen a hacerlo más diverso y más representativo de la población, introduciendo nuevos incentivos para la participación. Así mismo, su presencia obliga a modificar la agenda de los demás actores políticos, incorporando temas, problemas y sectores sociales antes no considerados como prioritarios.

En Venezuela, las organizaciones civiles autónomas han contribuido al proceso de reforma política que se viene produciendo en los últimos años. Esta contribución puede ser identificada en varios aspectos y niveles:

- a. Han hecho demandas al sistema que le han exigido ir más allá del molde paternalista y clientelista de relación que ha perdido vigencia. La más importante de ellas es quizás la reforma del régimen electoral y municipal, que reconoce un papel más activo a los ciudadanos tanto en la escogencia de sus representantes como en la gestión pública, por medio de mecanismos de participación como el referéndum (a nivel municipal).
- b. Intentan promover formas de acción y organización que valorizan las prácticas democráticas y participativas en el interior de cada organización y en sus relaciones con otros actores. Este proceso no es lineal, contempla avances y retrocesos, y no es homogéneo de una organización a otra. Pero la «democracia participativa», aun si no es definida con precisión, no deja de ser un principio global orientador de la acción de esas organizaciones.
- c. Las organizaciones no se han limitado a demandar reformas, sino además han diseñado proposiciones concretas de reforma institucional a los niveles local, regional y nacional. Una comparación entre estas proposiciones y muchas de las adoptadas por el Congreso muestra una coincidencia que no puede ser casual.

Los tres rasgos mencionados comienzan a convertir a las organizaciones civiles autónomas en nuevos polos de referencia para los individuos y grupos que se alejan de los partidos, esto no quiere decir

que se hayan trasladado mecánicamente las lealtades de uno a otro tipo de actores, sino que el campo de las opciones políticas se comienza a enriquecer con otra referencia, que si bien no está ni en capacidad ni en disposición de cumplir las funciones específicas de los partidos políticos, no obstante parece llenar un vacío que los partidos han dejado: el espacio de la representación efectiva de intereses específicamente civiles, es decir, de intereses que no han sido predefinidos, moldeados y subordinados a los programas y estrategias de los partidos.

## LOS EMPRESARIOS Y LAS ORGANIZACIONES

En el proceso de reforma institucional y política de los últimos años los sectores empresariales, a través de diversos medios organizativos, han venido jugando un papel esencial. Apoyados por la tendencia ideológica mundial favorable al mercado, y basándose en las obvias limitaciones y fallas del Estado venezolano, lanzaron desde hace ya varios años la ofensiva comunicacional a favor de la reducción del papel del Estado. Aunque siguen aprovechando hasta donde es posible las oportunidades y transferencias provenientes del Estado rentista (como lo muestra el importante subsidio otorgado a la deuda privada externa), presionan para acelerar el proceso de privatización y la reducción del gasto público.

Algunos dirigentes de los grandes grupos económicos participaron, directa o indirectamente, en los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Las recomendaciones generales de la Comisión, sobre todo en materia económica, fueron influidas por la orientación neoliberal (si bien no se identifican totalmente con ella). Finalmente, el gobierno de Carlos Andrés Pérez ha incorporado algunos cambios del sector privado y en buena parte ha ajustado su programa de reformas estructurales a dicha orientación.

De hecho, con las demandas de reforma se ha venido dando una superposición, y hasta una confusión, entre el antipartidismo de los ciudadanos y el antiestatismo empresarial. Más específicamente, puede observarse un alto grado de consenso aparente alrededor de las nociones de «sociedad civil» y «democratización». La sociedad civil definida por simple oposición, como todo aquello que es «privado» —sin establecer distinciones funcionales ni organizativas aparece en el discurso consensual como el polo oprimido por el Estado-partido, y el fortalecimiento de dicha sociedad civil se convierte en

sinónimo de democratización frente a un Estado excesivamente intervencionista e ineficaz.

El empresariado apoya las reformas políticas dirigidas a fortalecer el voto uninominal, ya que ellas debilitan a los partidos; así mismo, han sido activos en todas las proposiciones de privatización y reducción de campos de competencia del Estado. Este tipo de actitud no hubiera sido viable en la Venezuela anterior a la crisis, en la cual el Estado-partido era, desde el punto de vista empresarial, el garante de la distribución de renta, la paz laboral y la protección artificial del mercado interno. Pero si ese Estado ya ha demostrado su incapacidad para reproducir y mantener la legitimidad del sistema como un todo, se convierte en un obstáculo más que en un aliado. Para las organizaciones ciudadanas, por el contrario, el Estado no es tanto un obstáculo en sí mismo sino un instrumento que está siendo indebidamente ocupado y desviado de sus reales funciones por los partidos. Por eso, los actores más débiles de la sociedad civil orientan muchas de sus acciones a exigir intervenciones al Estado en nombre del «bien común» frente a intereses particulares. La lucha de los vecinos por lograr reconocimiento legal y ser incluidos en los procesos de planificación urbana muestra que uno de sus principales instrumentos es el poder de regulación del Estado sobre la utilización del espacio urbano. Las movilizaciones ecologistas también han sido principalmente dirigidas a exigir del Estado que aplique las regulaciones existentes o que cree otras nuevas para proteger el ambiente en general o un área en particular. Finalmente, los resultados de la aplicación de políticas neoliberales han hecho desconfiar de ese modelo. Ello no significa que las organizaciones civiles se conviertan por ello en defensoras del Estado-partido sino que intentan «liberar» al Estado de la dominación partidista.

## CONCLUSIONES

De estos escenarios el que parece menos viable es el primero, es decir, la auto-transformación del sistema político por sus propios actores predominantes. El segundo, aunque dotado de cierta viabilidad, no es, desde nuestro punto de vista subjetivo, deseable, y por su carácter autoritario se presta poco para la previsión de conductas «racionales» por parte de los actores. Por eso partiremos de postular un proceso complejo de transformación del sistema político, con ritmos irregulares, momentos de crisis y de estancamiento, y la intervención de múlti-

ples actores sociopolíticos.

Dado que los grupos de opinión y reflexión política que están ofreciendo opciones a la crisis actual mantienen lazos de diverso tipo con las organizaciones civiles autónomas que hemos descrito, las proposiciones de estos grupos están fuertemente influidas por las experiencias y proposiciones de aquéllas. Esto quiere decir que de hecho hay un «puente» entre sociedad civil y sistema político, por el cual pueden circular demandas y exigencias de transformación hacia el interior del mismo, sin que se confundan en un mismo actor funciones y niveles de acción distintos.

Una posible vía de desarrollo de la actual situación es que el vacío político creado por la pérdida de legitimidad de los partidos tienda a ser llenado más por organizaciones «híbridas» entre el partido y el grupo de presión que por nuevos partidos políticos. O en todo caso, los partidos actuales o quienes los desplacen se verán obligados a tomar más en cuenta las demandas de estas organizaciones, y por lo tanto a sustituir la relación de doble control sobre el Estado y la sociedad civil por una de control compartido.

Finalmente, es posible prever que el actual consenso de la sociedad civil sobre las reformas políticas y especialmente aquellas relativas a los mecanismos de representación puede ocultar un disenso alrededor del contenido económico y social del nuevo modelo. En consecuencia, el debate y los conflictos entre actores de la sociedad civil se intensificarán al salir a la luz sus diferencias una vez que se logren los objetivos comunes de reforma institucional, o que el actual sistema sea desplazado por la vía de los hechos y se plantee la redefinición de las relaciones entre los actores. Pero en todo caso, estas diferencias sólo pueden ser resueltas en el marco de una discusión específicamente política, y los actores que en ella participen no podrán ahorrarse el trabajo de definirse frente a las diferentes formas —y sobre todo, frente a los diversos contenidos socioeconómicos— de concebir la democratización que se desea. En otras palabras, de convertirse en actores políticos.

1. Compárense al efecto los resultados de dos encuestas presentadas y comentadas por Pasquale Nicodemo y Marcelino Bisbal en los números 542 y 545 de SIC.